



AGORA

Unidad de Información Pública

Dirección Nacional de
Educación Ciudadana,
Capacitación, Análisis
e Información
(DNECCA)

4 / 2006





Mesas de diálogo

Un acercamiento a la percepción de los valores y las prácticas democráticas

A mediados del mes de diciembre concluyó la ejecución de una de las actividades diseñadas por que el Programa Nacional de Educación Ciudadana "Para vivir en democracia" en la gestión 2006. Las mesas de diálogo sobre valores democráticos. Los resultados de la actividad serán analizados y sistematizados en un informe, en paralelo a algunas algunas preocupaciones sobre sus alcances.

Valores en diálogo

Durante los meses de octubre a diciembre de 2006, los equipos técnicos de las Cortes Electorales Departamentales y de la Corte Nacional Electoral realizaron, entre otros, talleres en más de 20 localidades del país, la mayor parte centros urbanos primarios. Alrededor de las 25 mesas de diálogo se congregaron más de mil participantes, entre los que convivieron autoridades municipales, miembros de consejos de vigilancia, representantes, miembros de comités directivos, de juntas vecinales, organizaciones no gubernamentales y otros entes locales.

Los diálogos giraron en torno a la libertad, la igualdad y el respeto como valores democráticos. Los representantes del organismo electoral apoyaron al desarrollo del diálogo con algunas previsiones respecto a la calidad de referentes para la sesión que usaran los valores y la manera en la cual las instituciones democráticas contribuyen a su práctica. A su vez, las autoridades aportaron con el material motivador de sus propias experiencias y realidades locales desde la perspectiva de la construcción democrática, evaluando cómo el desarrollo de las instituciones locales se ajusta a esos valores y cómo se relacionan estos con las normas.

Conversaciones que revelan percepciones sobre la democracia

Las conversaciones iniciaron por los participantes en cada una de las reuniones describiendo algunas consideraciones importantes de la estructura de relaciones sociales, institucionales y ciudadanas en general, vigentes en los espacios locales, buscando solo levantar la referencia a las personas y organizaciones como autoridades y representaciones regionales o organizaciones de gubernamentalidad, por ejemplo, así como la relación entre diferentes entes. A la vez, las manifestaciones de querer participar en las mesas revelan entre otros grupos sociales e instituciones nuevas y se transforman ante las preguntas que buscan una mayor democratización de la vida política.

Desde la construcción participativa para desarrollar el diálogo se incorporó un momento de reflexión sobre qué significa los valores democráticos en tanto principios libertarios, reflexión que permitió conocer qué se incorpora por construcción democrática en los niveles municipal y local. Como puede expresarse, las reflexiones al respecto permiten una

heterogeneidad de criterios, motivada por las experiencias propias de cada localidad local, por su experiencia en la institucionalidad democrática y las prácticas políticas que tienen, fundamentalmente, una especificidad de las consideraciones que se presentan sobre las mesas de diálogo de distintas localidades, mostrando de este tipo de participantes que ante cada una, resulta necesario para analizar las percepciones de construcción de la cultura democrática en manera por.

Aunque más que por reflexiones el trabajo de análisis detallado de la experiencia, no permite aventurarse adelante que de esta sesión de diálogo se elaboró mucha información respecto al conocimiento y entendimiento que tienen los líderes locales sobre los principios y prácticas democráticas. La presencia de dirigentes sindicales y escolares, así como de autoridades de las localidades en las mesas se reflejaron en conclusiones, permitió a cada localidad local realizar una evaluación, probablemente se permita, sobre qué prioridades tienen sus líderes locales en la construcción de estructuras y acciones democráticas.

En general, la experiencia servir también para preparar un acercamiento en habitual entre sectores y personas de las poblaciones rurales, que miden esfuerzos para implementar sus relaciones y actitudes a partir de los principios y valores democráticos. De esa manera la institución electoral ha contribuido a fortalecer las concepciones sobre comunidad y formas de relación humana de las comunidades locales.

Cada Corte Departamental Electoral se hará cargo del análisis de las conclusiones elaboradas en las mesas de diálogo desarrolladas en su jurisdicción. Luego, a nivel nacional se presentará una memoria que reunirá el desarrollo de esta experiencia que contribuirá a fortalecer la cultura democrática en el país.



Organismos electorales

Un dato importante a la hora de evaluar los avances de la democracia en América Latina es que en la gran mayoría de los países que conforman la región existen organismos electorales que, con sus particularidades, gozan de independencia y autonomía, son ellos los encargados de organizar y ejecutar la renovación periódica de autoridades y representantes a través del voto, el pilar fundamental de la democracia representativa. En este número de *Ágora* precisamente, se trata el tema de los organismos de estos organismos electorales a propósito de una investigación comparativa. La ocasión es propicia para apuntar en este espacio algunas dudas sobre el órgano electoral nacional, como parte de un proceso de avance de la institucionalidad democrática.

En Bolivia, los antecedentes del organismo electoral se remontan a la fundación de la República, la Constitución de 1826, redactada por el Libertador Bolívar, establecía la división del Estado en cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Poder Electoral. En el siglo XX se pueden marcar dos hitos importantes. En 1930, con el logro de la Revolución Nacional se instituyó el sufragio universal y en 1950 se realizó la primera elección bajo esta modalidad, para lo cual se aprobó el Estatuto Electoral (que establece los órganos electorales y en cuya estructura la Corte Nacional Electoral es la autoridad superior). Finalmente, en 1991, el organismo electoral vive una nueva etapa. Una asamblea política promueve el establecimiento de un organismo electoral autónomo respecto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los organismos judiciales como de los poderes del Estado.

Otro dato que habla a favor del avance de la institucionalidad democrática en el país, es el hecho que desde la recuperación de la democracia en 1980, al avance de los procesos electorales se ha ampliado, a la elección de representantes nacionales se añaden las elecciones de autoridades en los ámbitos municipal y departamental, la

realización de consultas populares (referéndum) y la elección de constituyentes.

Entre 1985 y 2006, el organismo electoral boliviano organizó y ejecutó seis elecciones presidenciales (1985, 1989, 1993, 1997, 2002 y 2005). En 1995, se realizó la primera elección de concejales municipales de este período democrático (junto a las elecciones nacionales), desde entonces, estas elecciones se han sucedido periódicamente y con calendario independiente (1997, 1999, 1999, 1999, 1999 y 2000).

El año 2006, por primera vez en la historia de Bolivia, la máxima autoridad política departamental, el prefecto, fue elegido por el voto de los ciudadanos. Las reformas constitucionales de 2004 instituyeron el referéndum como un mecanismo de democracia participativa. Ese mismo año se realizó el primer referéndum nacional de esta etapa sobre la política energética, promovido por el Poder Ejecutivo y en 2008 el referéndum entre las asambleas departamentales, promovido por iniciativa popular, finalizando las reformas de 2004 también instituyeron la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total de la Constitución. La primera elección de constituyentes se realizó el año 2009.

Seguando la misma línea de fortalecimiento de la institucionalidad electoral, no puede dejar de mencionarse el desarrollo del marco normativo bajo el cual se realizan elecciones y consultas populares en Bolivia. El principal instrumento es el Código Electoral que fue promulgado el 25 de junio de 1991 y que desde entonces ha tenido revisiones periódicas que han ampliado las responsabilidades del organismo electoral. Los otros instrumentos jurídicos que conforman el marco normativo electoral son: La Ley de Partidos Políticos promulgada el 25 de junio de 1999, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Partidos Indígenas del 7 de julio de 2004, la Ley del Referéndum del 6 de julio de 2004 y la Ley Especial de Consulta a la Asamblea Constituyente de 6 de marzo de 2006.

Editorial

ÁGORA

Corte Nacional Electoral (CNE)

Dirección Nacional de Educación Ciudadana, Capacitación, Análisis e Información (DNECAI)

Edición
Unidad de Información Pública

Diseño
Emérito Acuña

Ilustraciones
Alejandro Salazar

Impresión
SFC Impresores S.A.

D.L. 4-1-187-05 P.B.

La Paz, Bolivia



Un estudio comparativo

Los organismos electorales

La Corte Nacional Electoral encargó al abogado y politólogo Hugo San Martín Jacaite una investigación comparativa sobre las actividades de los organismos electorales en América Latina. En su trabajo, el investigador analiza la situación de los entes electorales en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Venezuela y Bolivia comparándolos en cuatro indicadores: destino para su labor fundamentalmente, su ubicación dentro del aparato estatal, la forma de nombramiento y remoción de sus integrantes, sus atribuciones y funciones y su relación con los partidos políticos.

Ofrecemos a nuestros lectores un fragmento del mencionado trabajo, en el que se analiza el propósito de la corte electoral comparativa. La versión íntegra del trabajo de San Martín ha sido publicada en el número ocho de la serie *Guadalupe de América e Investigación de la Corte Nacional Electoral*.

1. Situación de los organismos electorales en el aparato estatal

Como parte del proceso de consolidación de la democracia la creación de organismos electorales especializados y autónomos ha sido una demanda democrática y un aspecto de mayor trascendencia para la misma política. Se generaliza así la creación de nuevos órganos a la administración de los procesos electorales y, por consiguiente, a disminuir el fraude electoral y generar confianza pública en relación a los comicios.

El ejemplo hecho de la Argentina, la con la creación de los países latinoamericanos creó los entes electorales especializados. Entre organismos, han pasado a ser materia de regulación constitucional o de leyes de quórum especial. En la gran mayoría de constituciones con respecto a estos entes se establece la existencia de figuras electorales especializadas encargadas de la dirección, administración y vigilancia de los procedimientos electorales, o bien de la mediación jurisdiccional de los conflictos electorales. En algún caso, el organismo electoral ha sido consagrado constitucionalmente como una rama del poder públi-

co. En la mayoría, es un organismo autónomo e independiente con respecto a los otros poderes.

Las razones para el surgimiento de estos órganos han sido, entre otras, la especialización técnica-electoral, reducir los costos políticos de presiones para manipularlos, la necesidad de tener que no deben estar sujetos a la corriente política para que no padezcan de las atribuciones naturales del poder, y la necesidad de ofrecer una institución garantista de imparcialidad en los comicios.

La denominación de los organismos electorales varía según los países. Tribunal de Cuentas, Supremo Electoral de Nacional de Elecciones, Consejo (Cámara o Cede) Nacional Electoral, Consejo (Corte o Consejo) Central de Elecciones, Tribunal Superior Electoral de Superior de Justicia Electoral, Tribunal Superior de Elecciones o Colegiado de Elecciones, Tribunal Federal Electoral, Jefe Nacional de Elecciones.

Constituyen parte de lo que sucede en el proceso cuando los organismos electorales se reúnen una o más veces antes de las elecciones para discutir después de realizadas, los organismos electorales de todos los países latinoamericanos funcionan ahora de cuatro maneras o sus variantes:

Los organismos electorales son la autoridad del Estado especializada y en diversos grados autónoma respecto de la rama judicial electoral. Pueden venir con dependencias directamente en las administraciones electorales. La función electoral se ejerce por un complejo institucional que por lo general actúa independientemente dentro del Poder Judicial y en algunos casos con alguna autonomía respecto de las tres divisiones del poder político. Cabe señalar que a efecto de que un organismo pueda calificar como autónomo debe establecerse en la ley diversas garantías como la reforma a la independencia de sus integrantes, la reglamentación, la correspondencia al presupuesto que se le asigna y, para el caso que sea mixto, el período de ejercicio de sus integrantes desde el momento a los períodos de gobierno a efecto de evitar a sus miembros leyes de las voladitas propias de los cambios de la administración pública.



2. Nombramiento y remoción de sus miembros

Al ser organismos colegiados, sus integrantes son designados de diferente manera según la legislación de cada país. De algunos casos sus miembros son de origen exclusivamente judicial; en otros son designados por el Congreso, hoy más en los que el Poder Ejecutivo lo designa ante el Legislativo o ante el Judicial, también se da el caso excepcional de que la designación de sus miembros tiene origen en los tres poderes del Estado o que en su integración tengan representativa, en diverso grado, los poderes políticos. La posible dependencia política que con puede generar puede ser atenuada o evitada por los factores, a saber la independencia o no de los períodos de ejercicio con los del Ejecutivo y del Legislativo, la existencia o ausencia de mecanismos diferentes a la actividad política

Electoral en América Latina



de los candidatos a integrar el organismo electoral), y el establecimiento de los organismos en los cuales reside la función de remover a los miembros integrantes de estos organismos electorales supremos.

En relación a la imparcialidad política de sus componentes, se puede observar que en la mayor parte de los países se han establecido mecanismos a la posible actividad política de los miembros de los organismos electorales. Entre mencionados casos, en algunos casos, incluso el desempeño político de los aspirantes a integrar el organismo electoral supremo durante los años inmediatamente anteriores del término sería, mientras que en otros países se refieren únicamente al período de ejercicio efectivo del cargo.

En lo que hace a la nominación de los magistrados, mencionamos que en la mayoría de los casos, los magistrados resultan al mismo tratamiento que los demás altos dignatarios del Estado, lo cual significa que su designación solamente procede por votaciones a la Corte

trasciende a por delante y que debe ser decidida por el Congreso, en un primer período o fuero constitucional con carácter calificado o, en algunos casos, por la Corte Suprema de Justicia.

3. Atribuciones y funciones

En su conjunto, la organización electoral responde a un servicio público permanente, de carácter nacional, arraigado en la administración interna del poder electoral, que comprende tanto la preparación, organización, dirección, vigilancia y promoción de los comicios, como la realización de los comicios, la resolución de las impugnaciones y la declaración oficial de la elección.

En forma general, en el ámbito latinoamericano, los organismos electorales supremos no se circunscriben únicamente a la regulación y vigilancia de los comicios, sino que se extienden a una serie de actividades que se relacionan con la materia electoral, por ejemplo educación cívica.

En casi todos los países latinoamericanos también es responsabilidad de los organismos electorales la conformación del padrón electoral.

Los organismos electorales, igualmente, poseen facultades jurisdiccionales, es decir, se aplica la justicia electoral. Por justicia electoral vamos a entender los diversos medios jurisdiccionales de impugnación o control de los actos y procedimientos electorales para garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas tengan relación con los principios de constitucionalidad y legalidad, resolviendo los diversos conflictos o controversias electorales. La atribución de funciones en primera instancia como también de instancia definitivamente sobre los conflictos que actúan en la etapa preparatoria de las elecciones está sujeta a una gran variedad de opciones según los países.

También están aquellos que poseen funciones de control de constitucionalidad sobre los pronunciamientos de los órganos electorales y aquellos casos en los que la decisión final sobre las controversias electorales se repone en los organismos electorales supremos anteriormente expresados, en el Congreso o en parlamentos mixtos. Para muchos el momento en los que aparece la justicia electoral es un síntoma del poder

de los órganos electorales y de su autonomía, sin embargo, quienes defienden la separación dicen que quien impone justicia es el juez y parte, por tanto, quien es competente para ello no debe serle para esos fines electorales, en las cuales siempre hay posibilidad de conflicto, más el fin de garantizar una actividad imparcial.

4. Relación con los partidos políticos

Existen una tensión bastante común en la legislación electoral y es que la mayoría, la minoría y la disolución de los partidos políticos sea regulada por el órgano supremo electoral o por un organismo inferior. Asimismo, según el caso, a la autoridad electoral le corresponde el reconocimiento de los partidos, los frentes y las alianzas electorales.

Respecto a la intervención en los conflictos internos de los partidos, se observa que en algunos países la legislación electoral otorga posibilidades a la corte electoral competente para decidir sobre los litigios de los partidos una vez que se han agotado los recursos internos.

En lo relativo a los recursos de los partidos, los litigios ante se distinguen, en los países de latinoamérica, por regulaciones referidas legal que remiten al recurso y la competencia propiamente de los organismos para resolver los recursos impugnados en cuanto al fondo, fondo y aplicación de los recursos políticos o privados que se encuentran a disposición de partidos y candidatos.

Podemos observar que en casi todos los legislaciones electorales latinoamericanas que se ocupan con el tema, se atribuye expresamente al órgano supremo electoral para facultar el planteamiento al origen y al manejo de los recursos de los partidos. En una buena parte de los países en los que existe el financiamiento público de los gastos de los partidos, la autoridad electoral es encargada directamente de distribuir esos recursos. Al mismo tiempo, en los países donde no existen esos subsidios por un régimen del Poder Judicial, los organismos electorales administran los datos más básicos en los cuales se basa la distribución de los gastos electorales.



¿Qué es el organismo electoral boliviano?

El organismo electoral es una institución del Estado y de la democracia boliviana. Entre sus fines se la organización y ejecución de la elección primaria, libre e independiente de las intervenciones nacionales (presidente, vicepresidente, senadores, diputados), departamentales (prefectos), municipales (alcaldes y concejales) y comunales, al año de la elección en las unidades populares (definición). Tiene, asimismo, la tarea de emitir resoluciones, instrucciones e resoluciones, en materia electoral. Junto a su misión principal, el organismo electoral boliviano también se encarga de la administración del Registro Civil y promueve programas de educación cívica y ciudadana.

La Corte Nacional Electoral

La Corte Nacional Electoral es el máximo organismo en materia electoral, no judicial, y competencia en todo el territorio de la República. Tiene su sede en la Ciudad de La Paz.

Las decisiones son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irrevocables, excepto en materia que corresponde al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional.

Es integrada por cinco vocales, cuatro designados por el Congreso Nacional y uno nombrado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo. Su período de funciones es de cuatro años, pudiendo ser reelegido.

El Presidente de la Corte Nacional Electoral es elegido por la Sala Plena por votación secreta de dos tercios de sus miembros en ejercicio y dura en su cargo hasta la finalización de su mandato.

Las Cortes Departamentales Electorales

El Código Electoral establece nueve Cortes Departamentales Electorales que funcionan en las capitales de los departamentos de la República. Son compuestas por cinco vocales, a excepción de las Cortes de La Paz y Santa Cruz que se componen de diez vocales y la de Cochabamba integrada por siete vocales.

Las Cortes de La Paz y Santa Cruz están integradas por dos áreas constituidas por cinco vocales cada una, una atenta a la provincia en la que se encuentra la capital del departamento y la otra a las demás provincias.

En cada Corte Departamental Electoral, un vocal es designado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo, y los restantes por el Congreso Nacional de una lista única de candidatos propuesta por la Corte Nacional Electoral.

Atribuciones del organismo electoral

El Estado, a través del organismo electoral, ejerce la potestad para administrar las personas electorales en todo el territorio de la República, desde su inscripción al cargo del Poder Legislativo o en el defecto del Poder Ejecutivo hasta su conclusión, y para resolver sobre los derechos, deberes y prerrogativas reconocidos por la Constitución Política del Estado a las leyes al electorado,

a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y a los candidatos.

El organismo electoral tiene competencia para revisar y emitir dictamen administrativo-electoral, órdenes electorales y resoluciones electorales. Es una competencia indelegable y en todo el territorio está determinada por la división territorial electoral.

La Corte Nacional Electoral verifica al país en circunscripciones, distritos y centros electorales similares en cuanto la población, las características geográficas y las vías de comunicación. Asimismo, 90 días antes de la convocatoria a elecciones generales, declara las circunscripciones para la elección de diputados uninominales.

La Corte Nacional Electoral reconoce y registra la personalidad jurídica de las personas políticas. El reconocimiento y registro de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas le confiere el derecho electoral competente, según corresponde a una agrupación de carácter nacional, departamental o municipal. El organismo electoral tiene también la atribución de conocer la personalidad jurídica de las organizaciones políticas por las cuales concurren en el Código Electoral.

Registro Civil y Padrón Nacional Electoral

El Servicio Nacional del Registro Civil es una institución de orden público encargada de registrar los actos jurídicos y hechos sociales referidos al estado civil de las personas. Su funcionamiento y administraciones tienen subordinación a la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales en 1992.

La Corte Nacional Electoral tiene atribución para mantener y administrar el Padrón Nacional Electoral, un sistema de registro de ciudadanos en una base de datos informatizada con la información sobre libros, áreas, sectores, distritos y circunscripciones electorales.

De este sistema se obtiene la lista única de ciudadanos habilitados para votar en cada elección. El Padrón Electoral funciona y se actualiza permanentemente en las Cortes Departamentales Electorales y concuerda a nivel nacional por la Corte Nacional Electoral.

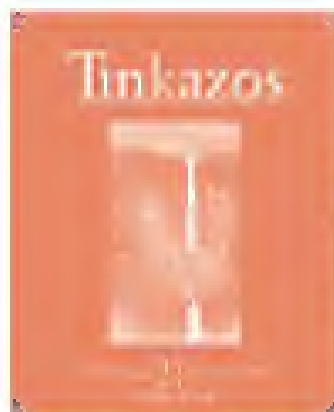
Educación ciudadana

El Código Electoral da atribuciones al organismo electoral para promover programas de educación cívica y ciudadana.

El organismo electoral realiza campañas masivas de información e capacitación de la población sobre el ejercicio regular del derecho al voto y sobre los deberes que conlleva ese derecho.

Desarrolla también programas de educación e capacitación permanentes sobre principios, prácticas, valores democráticos. Y promueve la investigación, el análisis y el debate sobre temas electorales, de ciudadanía y democracia que son publicados y difundidos.

La reforma del Estado



Tinkazos. 21 poemas Mayorga de ciudad leonesa

La Paz, FIEB, diciembre de 1994.

Tinkazos, la revista de ciencias sociales editada por el Programa de Investigaciones Lingüísticas en Bolivia, Trilce, donde hace un tiempo, un día del invierno para esta edición. El director literario de esta revista es Fernando Mayorga, sociólogo, doctor en ciencias políticas e historiador.

El director literario de esta edición, la parte central de la revista, está dedicado a la reforma del

Estado. En la revista, que en anteriores números de Trilce ha estado estuvo centrada en el tema de instituciones territoriales, en esta oportunidad pueden leerse con propiedad una historia más integral de la reforma dirigiendo la pesquisa a sus diversos frentes: tanto políticos-institucionales como socio-culturales, dice Mayorga en la Presentación de la publicación.

El *Ágora* está dirigido por un grupo del propio Mayorga que, a manera de introducción al tema se refiere a la "Búsqueda del Subterráneo, profundo e insubstancial". Su punto de partida es que hoy Bolivia vive una etapa de transición y, sobre esa idea, el texto se refiere a rescatar las preferencias de una mayoría social. La temática sigue desarrollándose con una entrada al sociólogo Fernando Collares titulado "Las ideas de modernidad histórica en las ideas de ningún tipo de nación". La tercera parte del *Ágora* es un diálogo a cuatro voces ("Las doctrinas de la reforma del Estado en Bolivia") en el que intervienen el propio Mayorga, Germo Cay Medina, coordinador del Informe de Desarrollo Humano de 1992, Bolivia, José Meléndez, director de la escuela de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, y el periodista Carlos Valverde. Desde diversas perspectivas y con una inevitable referencia de la conducta gubernamental y las contenidos del proyecto político que exige el MAS —aporta el director de la revista—, Valverde, Meléndez y Cay Medina de manera específica se refieren a la reforma del Estado. Y aunque no se refieren a la necesidad de un fortalecimiento del Estado, las ideas adquieren sobre las falencias de en la capacidad de gestión social. El *Ágora* se cierra con dos ensayos que tratan el tema de las identidades y la memoria que vive en la actualidad el debate en torno a una identidad. "La sociabilidad de la ciudad en Bolivia" de Oscar Insua y "Otras historias. Dilemas sociológicos sobre identidad y modernidad indígena en Bolivia" de Héctor Zúñiga. Los artículos a los que se refiere en el texto son: *Clases sociales y fragmentación de la población boliviana* de Ramón María Barrios y Xavier Abós, *Industria y la descomposición* de Víctor Maldonado, *El rol de Sillago, Ordeño, Durazo, Moya, Ocho y Salmor*, y *Asistencia en la zona de la zona*. Perspectivas de la ciudadanía boliviana sobre política y territorio de Ventanas y Zúñiga.

Además, este número de Trilce, como es usual de la revista, presenta sus contenidos dedicados a los estados del arte ("Decisiones actuales en el discurso de las autoridades" de Zúñiga, Tórres y Jilinski) y la investigación ("La subjetividad política de los presos de la ciudad de El Alto" de Jairo y Jairo), en escritos de cultura como un ensayo sobre Víctor Agustín Ugarte de Elio H. Arizón, J., Hernán González de la primera edición del Premio Nacional de Ciencias Exactas y Matemáticas otorgado por la Asociación FIEB, y las reseñas de libros.

Corte Nacional Electoral. Geografía electoral. *Desarrollo Humano 1995.* La Paz, CNE, 2000.

El organismo electoral tiene como uno de los prioridades la divulgación de la información que genera la consulta, particularmente la referida a los procesos electorales. Este libro, dedicado a los Decretos Nacionales del 18 de Octubre de 1994, se refiere en sus capítulos de información sociológica. El texto comienza en el capítulo primero con una introducción general de carácter, entre otros, sobre, información pre-partido, del y, estructura electoral. El desarrollo geográfico de los procesos electorales por provincia.



El sistema de justicia en la nueva Constitución Política del Estado. Opiniones y Análisis. La Paz, Trilce, 2000.

Este volumen aborda sobre justicia en torno a los temas de la justicia y la seguridad jurídica, enmarcado a los debates sobre la Asamblea Constituyente. Además de la reforma constitucional, algunos elementos de desarrollo de Ramón Collares, "Sistema constitucional de justicia" de Carlos Mayra, "Sociología, la reforma constitucional en la nueva Constitución" de José Antonio Rivera, "Sociología" y "Sociología para una integración del Poder Judicial" de Carlos Meléndez.

Corte Departamental Electoral de La Paz. Memoria de Dirección. Asamblea Constituyente y Referéndum sobre el sufragio. 2000. La Paz, 2000.

Esta publicación documenta el trabajo realizado por la Corte Departamental Electoral de La Paz en la elección de representantes a la Asamblea Constituyente y el Referéndum sobre las autonomías departamentales de junio de 2000. Además de los resultados de la votación, desgragados por las 21 comunas del departamento de La Paz, la memoria ofrece información detallada sobre el Poder Electoral, geografía electoral, información sobre el y el sistema electoral.



Eduardo Leado Román. *Trilce* electoral en Bolivia. La reforma de estado en el cuerpo del Ejecutivo y Legislativo. *Constitución de Bolivia.* No. 1. La Paz, CNE, 2000.

Este investigador responde a una pregunta: ¿Qué sistema electoral se aplicará en Bolivia para cumplir con el cuerpo del Ejecutivo y Legislativo? Para responder, el investigador ofrece, primero, un marco conceptual para: computar, analizar los sistemas de elección a lo largo de la historia de Bolivia, el sistema electoral de 1954-1955, el sistema proporcional, sistema 1961-1965 y el sistema censado proporcional en los discursos del actual proceso constituyente.

Un seminario **La educación ciudadana en contextos multiculturales**

El Programa Nacional de Educación Ciudadana "Para vivir en democracia" de la Dirección de Educación Ciudadana de la Corte Nacional Electoral organizó, al cierre de sus actividades en la gestión 2006, una jornada de discusión y reflexión sobre los desafíos, las oportunidades y los logros de la educación para la democracia en Bolivia. El evento se realizó en el II de diciembre en Trinidad, con el apoyo de la Corte Electoral Nacional Boliviana.

La jornada tuvo dos ejes temáticos. Por una parte un panel para la discusión de aspectos vinculados entre la educación ciudadana en contextos multiculturales y, por otra, una mesa dedicada a la exposición de experiencias concretas de educación ciudadana en diversos lugares del país.

Panel de debate

El panel "Educación ciudadana en contextos multiculturales: retos y propuestas" se planteó como objetivo promover un acercamiento conceptual plural a las principales características de una sociedad pluricultural y multilingüe como la boliviana para, entre otros elementos, pensar en las posibles pautas de política, acciones y acciones de las acciones de una educación para la democracia.

En el panel participaron especialistas e invitados del ámbito local, regional y nacional, entre ellos: Carlos Pérez, coordinador general, secretario principal del programa de Formación Interdisciplinaria Boliviana para los Países Andinos (PEIPA-Andes), Gabriela Peña, investigadora, asesora, investigadora del Programa de Territorios Rurales en Bolivia y asesora, entre otros, del área de asuntos indígenas y el autogobierno y lingüística Xavier Albi, asesor de una mesa sobre los pueblos indígenas, su realidad lingüística y cultural y sus relaciones con el Estado y la política.

Uno de los elementos conceptuales que sirvió de base para el intercambio de ideas fue la necesaria diferenciación entre "multiculturalidad" e "interculturalidad". El primero, en palabras de los panelistas, es un concepto que describe una situación de hecho: una sociedad en la que conviven más de una cultura, en cambio, el segundo, es un concepto que supone una construcción, una elaboración ética sobre las realidades en las que esas culturas conviven y se relacionan. En segundo término es, según los invitados, el más pertinente para pensar la democracia entre la educación para la democracia en Bolivia.

Los invitados locales reconocieron en su presencia el largo camino que recorre en el país la idea de la necesidad de una educación intercultural hasta converger finalmente en una política de Estado. En su propuesta, los panelistas insisten en que se discuta e implemente la interculturalidad que la educación para la interculturalidad debe impulsar la educación para repartirse a los campos de la democracia y la ciudadanía.

Por su parte, Gabriela Peña planteó, a partir de la propuesta, que es ser necesario, avanzar en la discusión sobre las relaciones entre educación, democracia y ciudadanía con énfasis en la desigualdad.

Finalmente, Xavier Albi centró su exposición en la problemática de la existencia intercultural, es decir, en una forma de ciudadanía que tenga presente los derechos relativos que se les reconocen a los pueblos indígenas en primer lugar, el derecho a ser reconocidos

en términos de igualdad; en segundo lugar, sobre la base de esa igualdad, el derecho a los "iguales por distintos", es decir, sobre el derecho a la voz y, finalmente, el "derecho al propio derecho", es decir, al derecho de ser escuchados.

Experiencias concretas

La mesa "Experiencias de educación ciudadana en Bolivia: Objetivos, logros y desafíos" contó con la participación de representantes del sector educativo: Irma Jasso, que trabaja en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, del Programa de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana (PCG) de la Corte Electoral Nacional Boliviana; del Instituto de Formación Técnica Integral de Cochabamba; y del Instituto de Capacitación Comunitaria, una instancia de la Corte Nacional Electoral; la Fundación UNIC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con sede en La Paz.

A su turno, cada institución informó sobre las características de su trabajo, los ejes temáticos sobre los que desarrollan sus acciones (participación, ciudadanía, derechos, valores democráticos, entre otros), la población a la que trabajan sus actividades (pueblos indígenas, dirigentes de organizaciones locales, mujeres y organizaciones primarias, respectivamente), las metodologías que utilizan, los límites y alcances de su trabajo y las lecciones aprendidas en la experiencia.

En la mesa se expusieron, además, los primeros resultados de una investigación encargada por la Corte Nacional Electoral precisamente sobre las diversas experiencias de educación ciudadana y para la democracia que se realizan o se realizan en el país en los últimos años en instituciones estatales o privadas. Una vez concluida la investigación, sus resultados serán de acceso público.

